



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA NECESIDAD DEL DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL, POR LA POSIBLE VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD EN LA INTEGRACIÓN O CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES QUE PARTICIPARÁN DE CARA AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 EN DURANGO, DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR OFICIOSO UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024.

Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES

I. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG33/2019, mediante el cual se aprobó la implementación, de manera excepcional, de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales.

II. El veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, el Consejo General de este Instituto, aprobó el Acuerdo INE/CG2158/2024, relativo a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025 (en adelante *Estrategia*) y sus respectivos anexos. Una de las líneas estratégicas de dicho documento, fue establecer el procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación de las figuras de Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral, para los procesos electorales a celebrarse en ese periodo.

III. Respecto a dichas figuras a contratar, el citado acuerdo del Consejo General consideró que en observancia del artículo 303, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Consejos Distritales, con la vigilancia de las representaciones de los partidos políticos, designarían en enero del año de la elección, a un número suficiente de personas que se desempeñarán como Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, de conformidad con la convocatoria pública expedida, para realizar las actividades establecidas en el párrafo 2 del citado artículo, en auxilio a las Juntas Distritales Ejecutivas y los Consejos Distritales, antes, durante y después de la Jornada Electoral, que cumplan los requisitos de su párrafo 3.

IV. Entre otras cuestiones, la citada *Estrategia* estableció que en términos de lo previsto en el Procedimiento para la Compulsa de la Clave de Elector – en el anexo



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

06¹ del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales vigente,² una vez que la Junta Distrital Ejecutiva ha notificado a las personas aspirantes a dichos cargos que aparecieron en la base del padrón de afiliadas/os o militantes, de algún partido político, si la persona aspirante **presenta ante la Junta Distrital Ejecutiva el oficio de desconocimiento de afiliación**, así como la solicitud de baja de datos personales de los padrones de militantes en el plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación, **podrá continuar con el procedimiento de reclutamiento y selección**. De presentarse este supuesto, se procederá de la siguiente manera:

1. La Junta Distrital Ejecutiva notificará a la persona aspirante que se **iniciará un procedimiento sancionador ordinario oficioso, para determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación**; asimismo, **la apercibirá de que en caso de que se demuestre su afiliación voluntaria, se le dará de baja del procedimiento de selección o, en su caso, se rescindirá su contrato y se iniciará procedimiento administrativo sancionador en su contra**.
2. La Junta Distrital Ejecutiva dará vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en un plazo máximo de dos días hábiles, para que de inmediato realice la investigación y recabe los elementos necesarios para iniciar un procedimiento sancionador ordinario oficioso, a fin de determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación. Al dar la vista, la Junta Distrital Ejecutiva enviará a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral un expediente con la siguiente documentación: a) Oficio de desconocimiento de afiliación; b) Solicitud de baja; c) Copia de la Credencial para Votar de la o el aspirante, o del comprobante de trámite o la constancia digital de identificación emitida por el INE, e d) Impresión de pantalla de la compulsa donde aparece el registro de la o el aspirante como afiliado/a.
3. Una vez realizada la investigación correspondiente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinará si procede proponer medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias y emplazará al partido político, así como a la o el aspirante para que manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga.
4. Concluido el procedimiento sancionador ordinario, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral notificará el sentido de la resolución al partido político, a la persona aspirante y a la o el Vocal Ejecutivo/a Distrital.

¹ Procedimiento para la compulsa.

² Aprobado mediante acuerdo INE/CG2158/2024, por el que se aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025 y sus respectivos anexos.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

V. El veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG2244/2024, relativo al Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2024-025, en los Estados de Durango y Veracruz.

VI. Por otra parte, mediante acuerdo INE/CG2501/2024, se dictó el *ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS*, el cual tuvo como propósito establecer las reglas, entre otras cuestiones, sobre la contratación de las personas que ocuparían los cargos de Supervisores Electorales y/o Capacitadores Asistentes Electorales, exclusivamente para dicho proceso de renovación de cargos dentro del Poder Judicial de la Federación.

VII. Sobre este particular, cobra relevancia que, a diferencia de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025, aprobada mediante acuerdo INE/CG2158/2024, al que se ha hecho referencia en el Considerando II del presente acuerdo, en el *PROCEDIMIENTO PARA LA COMPULSA DE LA CLAVE DE ELECTOR, ANEXO 6 DEL MANUAL DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS Y LOS SE Y CAE*, aplicable para la elección de personas juzgadoras, se previó lo siguiente:

Si la persona aspirante aparece en la base del padrón de la ciudadanía afiliada o militantes, será responsabilidad de la JDE generar el comprobante a través del SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, administrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. La JDE deberá comunicarle mediante el *Oficio de Notificación del Resultado de la compulsa* (Apéndice 6.1), mismo que se podrá hacer llegar vía correo electrónico.

Una vez que la JDE ha notificado a las personas aspirantes que aparecieron en la base del padrón de afiliadas/os o militantes, se les informará que no podrán continuar en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las y los SE y CAE al no cumplir con el requisito de no militar en ningún partido político.

Es decir, para las personas aspirantes a ocupar los cargos de SE y/o CAES, en el proceso de renovación de cargos del Poder Judicial de la Federación, el sólo hecho de aparecer en el padrón de afiliadas o afiliados a partidos políticos, tenía como consecuencia el no poder participar en el proceso de reclutamiento, al no cumplir con el requisito de no militancia, con independencia si se presentaba o no queja u oficio de desconocimiento.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

Procedimiento ordinario sancionador oficioso
UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

1. Inicio de procedimiento oficioso y diligencias. El trece de diciembre de dos mil veinticuatro, se dio inicio al procedimiento ordinario sancionador oficioso citado al rubro, con motivo de **cuatro** oficios de desconocimiento y anexos, signados por las personas enlistadas en la siguiente tabla, **quienes aspiraban al cargo de Supervisoras y/o Capacitadoras Asistentes Electorales dentro del Proceso Electoral Local 2024-2025 en Durango**, a través de los cuales, hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, posibles indicios de que el Partido Revolucionario Institucional las afilió sin su consentimiento y, para ello, utilizó indebidamente sus datos personales:

No.	Persona involucrada
1	Elizabeth Juárez Suárez
2	Sara Ruiz Cerda
3	Esperanza de Fátima Santillán Herrera
4	Nabile Amairani Galván Tapia

A partir de lo anterior, como parte de la investigación implementada, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, registró el expediente respectivo y, entre otras cuestiones, ordenó una búsqueda en el Sistema de Afiliados que administra la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, con el objetivo de conocer el estatus que guarda la afiliación de las **personas involucradas**, al Partido Revolucionario Institucional.

Además, se solicitó al partido político señalado como responsable, informara si dentro de su Padrón de Afiliados se encontraban registradas las personas antes mencionadas; la fecha de alta en el referido padrón y remitiera **el original** de los expedientes en que obraran las constancias de las afiliaciones correspondientes.

Finalmente, se instruyó al partido político que, a partir del desconocimiento realizado por las personas aspirantes, procediera de inmediato a darlas de baja de su padrón de militantes.

En este tenor, el Partido Revolucionario Institucional, señaló que las partes involucradas aludidas **sí** fueron sus militantes, sin que hasta ese momento haya aportado documentación con la cual acredite la voluntad de éstas de querer formar parte de sus filas de militantes, con excepción del caso que abajo se indica:

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación	Fecha de baja	Documentación aportada
1	Elizabeth Juárez Suárez	11/02/2021	29/11/2024	No aportó



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación	Fecha de baja	Documentación aportada
2	Sara Ruiz Cerda	14/08/2020	29/11/2024	No aportó
3	Esperanza de Fátima Santillán Herrera	14/03/2020	28/11/2024	Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político ³
4	Nabile Amairani Galván Tapia	27/12/2023	24/11/2024	No aportó

Por su parte, la Encargada de despacho del cargo de Vocal Secretaria de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Durango, en cumplimiento del requerimiento decretado, en un primer momento, mediante el oficio INE-JDE-DG03/VS/010/2025, informó lo siguiente:

No.	Persona involucrada	Estatus
1	Elizabeth Juárez Suárez	No concluyó con el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las SE y CAE
2	Sara Ruiz Cerda	Concluyó con el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las SE y CAE. <u>Se encuentra en lista de reserva.</u>
3	Esperanza de Fátima Santillán Herrera	Concluyó con el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las SE y CAE. <u>Se encuentra en lista de reserva.</u>
4	Nabile Amairani Galván Tapia	Acreditó satisfactoriamente el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las SE y CAE. <u>Fue incorporada bajo el régimen de Honorarios Eventuales</u> en el cargo de Supervisora Electoral a partir del 16 de enero de 2025.

Lo anterior, sin precisar el proceso de reclutamiento que cada uno de ellos estuvo participando.

2. Solicitud de información y actualización a la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Durango. Así las cosas, en atención a la información proporcionada por ambas partes, se requirió de nueva cuenta a la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Durango, informara lo siguiente:

a) Especifique **para qué tipo** de proceso electoral, "Local 2024-2025 (Durango) y en su caso, a los extraordinarios que deriven de este" o "Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025", participaron las siguientes personas en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de Supervisoras Electorales y/o Capacitadoras Asistentes Electorales:

³ Información validada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto, a través del oficio INE/DERFE/STN/03121/2025



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

No.	Persona involucrada
1	Elizabeth Juárez Suárez
2	Sara Ruiz Cerda
3	Esperanza de Fátima Santillán Herrera
4	Nabile Amairani Galván Tapia

b) Una **actualización** del estatus en que se encuentran dichas personas, respecto del procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de Supervisoras Electorales y/o Capacitadoras Asistentes Electorales. Esto es, si acreditaron o no todas las etapas del mismo y si a la fecha en que se actúa han sido incorporadas bajo algún régimen de contratación a este Instituto Nacional Electoral, con la precisión de dicho régimen y de la fecha a partir de la cual surtió efectos.

En cumplimiento a lo solicitado, mediante oficio INE-JDE-DG03/VS/0067/2025, la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Durango, informó lo siguiente:

Persona Involucrada	Estatus	Régimen de contratación	Fecha de Contratación
Elizabeth Juárez Suárez	No concluyó el procedimiento de contratación argumentando motivos personales.	Honorarios eventuales	No aplica
Sara Ruiz Cerda	Activa como Capacitadora Asistente Electoral en el PEEPJF 2024-2025, se agrega ANEXO I con la información correspondiente.	Honorarios eventuales	01-feb-2025
Esperanza de Fátima Santillán Herrera	Activa como Capacitadora Asistente Electoral en el PEEPJF 2024-2025, se agrega ANEXO II con la información correspondiente.	Honorarios eventuales	01-feb-2025
Nabile Amairani Galván Tapia	Activa como Supervisora Electoral en el PEL 2024-2025, se agrega ANEXO III con la información correspondiente.	Honorarios eventuales	16-ene-2025

Como se observa, a partir de la información proporcionada por el indicado órgano subdelegacional de este Instituto en Durango, se pudo advertir que Sara Ruiz Cerda y Esperanza de Fátima Santillán Herrera, fueron contratadas como Capacitadoras Asistentes Electorales en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, lo cual escapa a la materia de pronunciamiento por parte de esta Comisión de Quejas y Denuncias, ya que, como se dijo, desde un principio, no podían participar como aspirantes a ocupar dichos cargos, sin necesidad de pronunciamiento específico por parte de esta autoridad electoral; ya que ello, por sí mismo, constituye una aparente contravención a los establecido en la Estrategia Específica a que alude el numeral **VII** del apartado de antecedentes del presente acuerdo.

Lo anterior, porque a pesar de haber sido localizadas en los padrones de militantes de partidos políticos, en específico, del Partido Revolucionario Institucional, a partir del procedimiento de compulsas realizado por la Junta Distrital 03 de este Instituto en Durango, y existir constancia en autos sobre la presunta cédula de afiliación con firma, al menos de la segunda de ellas, fue informado a la Unidad Técnica de lo



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

Contencioso Electoral que actualmente se encuentran activas como Capacitadoras Asistentes Electorales en el PEEPJF 2024-2025.

3. Prevención a ciudadanas. Como consecuencia de lo advertido en el punto anterior, del análisis efectuado a los oficios presentados por las ciudadanas Sara Ruiz Cerda y Esperanza de Fátima Santillán Herrera, se desprende que se trata de documentos donde desconocieron su afiliación al Partido Revolucionario Institucional, lo cual se consideraba un requisito suficiente para dar inicio a un procedimiento oficioso, toda vez que el mismo tenía como propósito prevenir que personas con registro partidista pudiesen ocupar cargos electorales como lo son los Capacitadores Asistentes Electorales y/o Supervisores Electorales, para el proceso electoral local Ordinario 2024-2025, en observancia a los principios de independencia e imparcialidad que rige el actuar de este Instituto.

Sin embargo, de las diligencias de investigación preliminar implementadas por esta autoridad, se desprende que dichas personas no participaron en el proceso electoral "Local 2024-2025 (Durango) y en su caso, a los extraordinarios que deriven de este", sino que participaron en el proceso electoral "Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025".

En consecuencia, al no estar en el supuesto previsto para la procedencia del procedimiento oficioso, y al no advertirse la existencia de escritos de queja y/o denuncia en contra del ente político en cita por la realización de dicha conducta, se previno a las ciudadanas Sara Ruiz Cerda y Esperanza de Fátima Santillán Herrera, para que, en el plazo de tres días, especificaran si era su voluntad presentar una queja por indebida afiliación en contra del Partido Revolucionario Institucional, en cuyo supuesto deberían remitir escrito que cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 465, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; haciéndoles de su conocimiento que, en caso de no dar respuesta a lo anterior, se tendría por no presentada denuncia alguna y no se continuaría con la sustanciación del procedimiento ordinario sancionador.

En este tenor, se precisa que dichas ciudadanas fueron omisas en atender la prevención aludida, por lo que, por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, se les tuvo por no presentada queja alguna y, en consecuencia, ya no se continuaría con la secuela procesal; no obstante, se dejaron a salvo sus derechos a fin que, si era su deseo hacerlo, podrían acudir nuevamente ante esta autoridad a fin de controvertir su registro como militantes del citado partido político, lo cual, en el caso, sería materia de un nuevo procedimiento ordinario sancionador.

4. Emplazamiento. En otro orden de ideas, en el mismo acuerdo de diecinueve de marzo, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador oficioso,



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

únicamente respecto de Elizabeth Juárez Suárez y Nabile Amairani Galván Tapia; además se ordenó emplazar al Partido Revolucionario Institucional como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes, en relación a la posible vulneración a su derecho político de libre afiliación en su modalidad positiva —indebida afiliación—, en agravio de las dos personas antes referidas.

Así las cosas, el veinticinco de marzo siguiente, estando dentro del plazo concedido al denunciado para dar respuesta al emplazamiento formulado, se recibió en la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Durango, el oficio SECORGDGO/0020/2025, signado por la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Durango, por el que ofreció los originales de las cédulas de afiliación de Elizabeth Juárez Sánchez y Nabile Amairani Galván Tapia.

5. Propuesta de medida cautelar. En este sentido, a partir de la información con que se cuenta, se acordó remitir la propuesta de medidas cautelares a esta Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, respecto de los hechos puestos en conocimiento en el presente procedimiento ordinario sancionador por parte de **Nabile Amairani Galván Tapia**, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente.

Lo anterior, habida cuenta que Sara Ruiz Cerda y Esperanza de Fátima Santillán Herrera, participaron en el proceso electoral “Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, y Elizabeth Juárez Sánchez, no concluyó con el procedimiento de contratación respectivo.

Por lo que, en congruencia con el procedimiento oficioso aprobado por el Consejo General a que se ha hecho referencia apartados arriba, así como por existir evidencia, al menos de manera preliminar, que podría apuntar hacia una posible afiliación amparada con un consentimiento previo por parte de quien participó en el proceso a ocupar cargos electorales en el marco de la estrategia de capacitación electoral aprobada para el proceso electoral local 2024-2025, por parte del Consejo General de este organismo electoral nacional.

En efecto, tal y como se ha mencionado anteriormente, el presente procedimiento tuvo su origen en los oficios de desconocimiento promovidos por las ciudadanas previamente citadas, entre ellas, **Nabile Amairani Galván Tapia** de quien se emite el presente pronunciamiento, quien participó en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales y/o capacitadoras asistentes electorales, para el Proceso Electoral Local 2024-2025 en Durango, al



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

haberse enterado, según su dicho, de estar afiliada al Partido Revolucionario Institucional sin su consentimiento.

En este sentido, el tratamiento que debe darse a este asunto, toda vez que deriva de un procedimiento oficioso establecido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025 y sus respectivos anexos, aprobada por el Consejo General de este Instituto, por tener su origen en un oficio de desconocimiento de afiliación, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por desconocer las razones de su incorporación al padrón de militantes de ese instituto político, lo que a la postre, permitiría seguir participando en el citado proceso de selección y contratación de personas supervisoras y/o capacitadoras asistentes electorales.

Así pues, atendiendo a las razones que fundaron la aprobación de la referida Estrategia, este Instituto Nacional Electoral debe garantizar que el procedimiento de selección y contratación de este tipo de funcionariado electoral esté sujeto a los principios de imparcialidad e independencia, rectores de la función electoral, y sobre todo, que los mismos principios sean observados por quienes fungirán y serán contratados para desempeñar los indicados cargos electorales.

A partir de lo anterior, la propuesta de adopción de medidas cautelares en el presente asunto, tiene su origen en que si bien en un principio existió una manifestación formal por parte de la persona a que se refiere este acuerdo, de desconocer las razones por las cuales fue inscrita sin su aparente consentimiento a un padrón de militantes de un partido político, lo cierto es que como se indicó párrafos arriba, el partido denunciado, como parte de las indagatorias realizadas en el procedimiento ordinario sancionador oficioso citado al rubro, aportó elementos de prueba para desvirtuar las afirmaciones de la persona involucrada, esto es, que su afiliación sí estuvo precedida de un consentimiento previo e incluso, existe documentación que, en un análisis preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, podría acreditar su afiliación con ese Instituto político, lo que a la postre y para los fines del proceso de contratación de personas servidoras electorales, podría contravenir los principios que deben ser observados en la función electoral.

Lo anterior, sin que escape al conocimiento de esta Comisión de Quejas y Denuncias, un posible actuar irregular en el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo INE/CG2158/2024, específicamente por cuanto hace al *PROCEDIMIENTO PARA LA COMPULSA DE LA CLAVE DE ELECTOR, ANEXO 6 DEL MANUAL DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS Y LOS SE Y CAE*, aplicable para los aspirantes a CAES y/o SE, en el proceso extraordinario para la renovación de cargos del Poder Judicial de la Federación, por cuanto hace a las contrataciones ocurridas para los casos de Sara Ruiz Cerda y Esperanza de Fátima Santillán Herrera, quienes, según lo informado cuentan con un estatus activo como



CAES, en el citado proceso electivo. En este sentido, lo procedente, es ordenar el inicio de un cuaderno de antecedentes, a fin de que, por cuerda separa al procedimiento que nos ocupa, se realicen las investigaciones respectivas a fin de conocer las razones que llevaron, en apariencia, a una contratación irregular de dichas personas y a partir de ello, se determine lo que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral tiene competencia para resolver acerca de la adopción de medidas cautelares, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, apartado D), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 459, párrafo 1, inciso b); 468, párrafo 4; 471, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, párrafo 2; 5, párrafos 1, fracción II, y 2, fracción I, inciso c); 38, párrafo 1, fracción I; y 40, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

En el caso, se actualiza la competencia de este órgano colegiado porque los hechos sobre los cuales se realiza el presente pronunciamiento consisten, esencialmente, en la posible contravención a los principios de imparcialidad e independencia que debe ser observada en la integración de los órganos electorales constitucional y legalmente constituidos para la debida prosecución del proceso electoral local 2024-2025. Lo anterior, habida cuenta que las figuras de personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes Electorales, se erigen como piezas fundamentales en la organización de los procesos electorales, pues son el vínculo entre la ciudadanía sorteada y el Instituto Nacional Electoral, además de que sus actividades son necesarias para el desarrollo de la elección, pues de esta forma se garantiza el ejercicio del derecho al sufragio del electorado y la autenticidad de los resultados.

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS Y MEDIOS DE PRUEBA

Como se adelantó apartados arriba, **una persona**, quien aspiraba al cargo de Supervisora y/o Capacitadora Asistente Electoral dentro del Proceso Electoral Local 2024-2025 en el Estado de Durango, hizo del conocimiento de esta autoridad electoral, posibles indicios de que el Partido Revolucionario Institucional la afilió sin su consentimiento y, para ello, utilizó indebidamente sus datos personales.

En este tenor, en el Procedimiento para la Compulsa de la Clave de Elector -Anexo 6 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y las y los Capacitadores Asistentes Electorales, vigente, previsto en el



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

acuerdo INE/CG2158/2024, por el que se aprobó la *Estrategia* y sus respectivos anexos, se estableció como requisito legal para ocupar alguno de estos cargos, el no militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral,⁴ en el último año previo a la difusión de la convocatoria, el cual sustenta la temporalidad en la resolución SUP-RAP-373/2018 y acumulados,⁵ emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, en la citada *Estrategia* se determinó que con el objetivo de garantizar los principios de imparcialidad e independencia rectores de la función electoral, que deben ser observados en las actividades de las y los Supervisores Electorales y las y los Capacitadores Asistentes Electorales, estableció un criterio orientado a dar prioridad a aquellas personas aspirantes que no militan o se encuentran afiliadas a los partidos políticos, lo anterior, con el fin de atender los citados principios en la integración de Mesas Directivas de Casilla, teniendo como premisa la intervención durante las etapas de reclutamiento y selección, sin afectar su derecho a participar en el proceso.

Con este fin, y atendiendo a lo previsto en el Procedimiento para la Compulsa de la Clave de Elector, una vez que la Junta Distrital Ejecutiva ha notificado a las personas aspirantes que aparecieron en la base del padrón de afiliadas/os o militantes, si la persona aspirante presenta ante el citado órgano subdelegacional de este Instituto el oficio de desconocimiento de afiliación, así como la solicitud de baja de datos personales de los padrones de militantes en el plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación, podrá continuar con el procedimiento de reclutamiento y selección.

A partir de ello, la Junta Distrital Ejecutiva notificará a la persona aspirante que se iniciará un procedimiento sancionador ordinario oficioso, para determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación; asimismo, la apercibirá que, en caso de que se demuestre su afiliación voluntaria, se le dará de baja del procedimiento de selección o, en su caso, se rescindirá su contrato y se iniciará procedimiento administrativo sancionador en su contra.

Posterior a ello, la Junta Distrital Ejecutiva dará vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que realice la investigación y recabe los elementos necesarios para iniciar un procedimiento sancionador ordinario oficioso, a fin de

⁴ Artículo 303, numeral 3, inciso g) de la LGIPE. La Sala Superior del TEPJF interpretó, por medio del expediente SUP-RAP-373/2018 y ACUMULADOS, con fecha del 24 de octubre de 2018, que la temporalidad de separación de militancia partidista que debe exigirse a la ciudadanía que busque fungir como SE o CAE no podría ser de tres años, sino que ésta sería de un año contado a partir de la difusión de la convocatoria correspondiente.

⁵ A juicio de esta Sala Superior, la temporalidad de separación de militancia partidista que debe exigirse a la ciudadanía que busque fungir como supervisora o capacitadora asistente-electoral es de un año contado a partir de la difusión de la convocatoria correspondiente.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación. Finalmente, se determinó que una vez realizada la investigación correspondiente, la Unidad Técnica determinará si procede proponer medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias.

En este sentido, tal y como se refirió en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, a partir del oficio de desconocimiento de la persona aspirante y que forma parte de la investigación implementada en el expediente citado al rubro, se tienen elementos de prueba que, en un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, podrían atentar contra los principios que rigen la función electoral a cargo de esta autoridad y todas y todos sus integrantes, cometidos por parte de quien ocupa un cargo de supervisora electoral o Capacitadora Asistente Electoral; de ahí que la Unidad Instructora, someta a la consideración de esta Comisión de Quejas y Denuncias, la adopción de medidas cautelares.

MEDIOS DE PRUEBA

1. Documentales públicas, consistentes en las impresiones obtenidas del Sistema de Afiliados que administra la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, con el objetivo de conocer el estatus que guarda la afiliación de la persona involucrada, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

2. Documental pública, consistente en oficio INE-JDE-DG03/VS/0067/2025, la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Durango, mediante el cual informó, entre otras cuestiones, que Nabile Amairani Galván Tapia, se encuentra activa como supervisora electoral en el PEL 2024-2025.

3. Documental pública, consistente en el acta circunstanciada, instrumentada por la autoridad instructora, en la que se dio cuenta que el registro como militante de la persona involucrada, había sido eliminado del portal de internet del Partido Revolucionario Institucional.

4. Documental Privada, Consistente en el oficio SECORGDGO/0020/2025, signado por la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Durango, por el que ofreció el original de la cédula de afiliación de Nabile Amairani Galván Tapia y otra, en el que se aprecia la **firma manuscrita** de la persona que, bajo la apariencia del buen derecho, manifestó su deseo de afiliarse al partido político en cuestión.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

De las constancias de autos, se advierte esencialmente, lo siguiente:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

- ❖ El once de febrero de dos mil veintiuno, la persona involucrada fue encontrada como militante del Partido Revolucionario Institucional en el *Sistema de Afiliados*, base de datos administrada por el Instituto Nacional Electoral y alimentada por los partidos políticos, por parte de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Durango, en el marco del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las figuras de Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes Electorales, para el proceso electoral local 2024-2025.
- ❖ Derivado de ello, y dentro del plazo establecido por la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025, la persona ciudadana en cuestión presentó oficio de desconocimiento por una presunta indebida de afiliación, a través del cual, a partir de su contenido, se hace patente su disconformidad con su detección como militante del citado partido político, a la vez que dicha manifestación, de acuerdo con lo previsto en mencionada Estrategia, le permitiría continuar con el proceso de selección de aspirantes a los cargos electorales tantas veces indicados.
- ❖ Que a partir de la investigación realizada por parte de la autoridad instructora, existen elementos para afirmar, de forma preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que efectivamente, dentro del año previo a la emisión de la convocatoria respectiva, dicha persona se encontró dentro de los registros válidos de militantes del Partido Revolucionario Institucional; lo anterior, a partir del reconocimiento que realiza el partido político sobre dicha militancia, así como la constancia (cédula de afiliación) que exhibe para demostrar sus afirmaciones.
- ❖ Que al existir indicios, que demuestran, en un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, que la persona denunciante tiene un registro con un instituto político, por aparecer como su militante, su integración a las funciones electorales como supervisora electoral y/o capacitadora asistente electoral, para el proceso electoral local 2024-2025 en Durango, podría preliminarmente trasgredir los principios de imparcialidad e independencia, rectores de la función de los organismos electorales y sus integrantes, como lo son los cargos referidos líneas arriba.

TERCERO. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES

En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su pronunciamiento son los siguientes:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

- a) **Apariencia del buen derecho.** La probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso.
- b) **Peligro en la demora.** El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.
- c) **La irreparabilidad de la afectación.**
- d) **La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.**

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la doctrina denomina como el ***fumus boni iuris*** —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del ***periculum in mora*** —temor fundado— de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final.

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la instauración del procedimiento.

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el **segundo elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.**

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una **evaluación preliminar** en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una **acción ejecutiva, inmediata y eficaz**, que debe adoptarse mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad,



si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se refieran a **hechos objetivos y ciertos**; no así respecto de hechos que se hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro **MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.**⁶

⁶ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición de carácter electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja.

CUARTO. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

1. MARCO JURÍDICO

NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS ELECTORALES LOCALES, ASÍ COMO SUS ATRIBUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES

A fin de dar contexto al objeto, alcances y finalidad de la presente determinación, es necesario precisar la naturaleza jurídica de este Instituto y los organismos públicos electorales locales, en lo relativo a la organización y preparación de los procesos electorales, toda vez que estas entidades del Estado Mexicano, son quienes desde un rango constitucional y legal, tienen la encomienda total de la preparación y organización de los procesos electorales en todas sus etapas, así como la designación de los funcionarios electorales encargados de las labores inherentes, antes, durante y posterior a la jornada de los procesos electorales de su competencia, dentro de los cuales, obviamente se encuentra la contratación, reclutamiento y capacitación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

Bajo esta perspectiva, debe tenerse en cuenta que el artículo 1 de la Constitución Política Federal, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Enseguida, el artículo 5, párrafo cuarto, de la misma disposición suprema, prevé que las funciones electorales y censales tienen carácter obligatorio y gratuito. Por su parte, el diverso 35, fracción I de la propia carta Magna, señala que es derecho de la ciudadanía votar en las elecciones.



El artículo 36, fracción III de la noma en comento, refiere que son obligaciones de la ciudadanía mexicana, entre otras, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley.

De conformidad con el artículo 41, párrafo tercero del citado cuerpo normativo, así como 29, 30 párrafos 2 y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. El mismo precepto constitucional en su Base V, Apartado A, señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales y que el Instituto, es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley.

En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, **independencia, imparcialidad**, máxima publicidad, objetividad, paridad y su realización con perspectiva de género, serán principios rectores.

Asimismo, dispone que el Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño y, que las Mesas Directivas de Casilla, estarán integradas por la ciudadanía.

En el párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1, 4 y 5 del artículo 41 Constitucional citado, en concatenación con el diverso 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que **corresponde al Instituto, para los procesos electorales federales y locales, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación del funcionariado de sus Mesas Directivas de Casilla, así como las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de la observación electoral.**

El numeral 1, párrafos 1, 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que sus disposiciones son de observancia general en el territorio nacional y para la ciudadanía que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero, aplicables a las elecciones en el ámbito federal y local respecto de las materias que establece la Constitución Federal, y que las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Carta Magna y en la Ley General de la materia antes citada.

El artículo 4, párrafo 1 de la Ley General a que nos hemos venido refiriendo, establece que el Instituto y los organismos públicos electorales locales, en el ámbito



de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar su cumplimiento. En el mismo tenor, el diverso numeral 8, párrafos 1 y 2 de ese cuerpo legal, determina que es obligación de la ciudadanía integrar las Mesas Directivas de Casilla y participar como observadores/as electorales de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como de las demás formas de participación ciudadana.

El artículo 33, párrafo 1 de la misma ley, dispone que el Instituto ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal. Por su parte, el diverso 35 determina que el Consejo General, en su calidad de órgano superior, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realicen con perspectiva de género.

NATURALEZA JURÍDICA, ATRIBUCIONES E IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES DE LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y LAS Y LOS CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES, EN LOS PROCESOS ELECTORALES

El artículo 35, fracción VI de la Constitución Federal, prevé el **derecho de participación política** de ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. En este sentido y en congruencia con lo dispuesto en el diverso 41, fracción V, de la propia Carta magna, el Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo quien, junto con las autoridades administrativas locales electorales, se encuentra a cargo de la función estatal de organizar las elecciones.

Para los procesos electorales federales y locales, al Instituto Nacional Electoral le corresponde, entre otras, la capacitación electoral; la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas.

En el artículo 76 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que durante el proceso electoral, funcionarán consejos distritales, los cuales, en términos del diverso numeral 303, párrafo 1, entre otras cosas, designarán a un número suficiente de supervisores/as y capacitadores/as-asistentes electorales, quienes, en general, son las personas encargadas de las tareas relacionadas con la capacitación de la ciudadanía que integrará las mesas



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

directivas de casilla; la ubicación, verificación y de la instalación y clausura de las casillas; traslado de paquetes; realización de cómputos, entre otras.

En el párrafo 3 del mismo artículo, se señalan los requisitos que deberán cumplir quienes se interesen por fungir como supervisores/as y capacitadores/as-asistentes electorales, destacando, en lo que al presente acuerdo nos interesa, **no militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral.**

Ahora bien, a fin de poner en relieve la importancia de la función de las y los Supervisores Electorales y las y los Capacitadores Asistentes Electorales, debe precisarse que de conformidad con el artículo 303, párrafo 2 de la Ley General de la materia, los supervisores/as y capacitadores/as-asistentes electorales auxiliarán a las juntas y consejos distritales en los trabajos de:

- a. Visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas.
- b. Identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casillas.
- c. Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección.
- d. Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla.
- e. Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral.
- f. Traslado de los paquetes electorales apoyando a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla.
- g. Realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales.
- h. Los que expresamente les confiera el consejo distrital, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la LGIPE, relacionado con la recolección de la documentación de las casillas.

Sobre este particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-373/2018 Y ACUMULADOS,⁷ se refirió, en relación con las funciones que desempeñan los Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, de la forma siguiente:

...
67 Como se observa, las tareas que realizan las personas que fungen como supervisoras y capacitadoras-asistentes electorales inciden directamente en el desarrollo de los procesos electorales, en todas sus etapas: en la fase de preparación de la elección, el día de la jornada electoral y en los cómputos de los votos.

⁷ Consultable en el siguiente portal electrónico <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-RAP-0373-2018.pdf>



68 Así, toda vez que **por el desempeño de sus labores son susceptibles de afectar el resultado de los comicios, es de especial relevancia imponer mecanismos que garanticen que la ciudadanía que participa en dichos cargos observe los principios que deben regir a los procesos electorales**, destacadamente los de **imparcialidad e independencia**.

69 Estos principios constitucionales exigen estándares procedimentales y estructurales que garanticen el ejercicio de los derechos de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

70 Así, es claro que los supervisores/as y capacitadores/as deben satisfacer, en la medida posible, los estándares de independencia e imparcialidad, en tanto que sus funciones son presupuestos para el debido desarrollo de la elección, lo que involucra además el derecho de votar de la ciudadanía, y la autenticidad de los resultados.

71 De esta manera, deben evitarse al máximo posible cualesquiera factores o circunstancias susceptibles de incidir en el cumplimiento o valoración de su función, como lo pudiese ser el vínculo partidista con alguno de los participantes en la contienda electoral.

72 Objetivamente, lo ordinario es que la militancia partidista implica la adhesión a ciertos ideales, convicciones y principios que están estrechamente ligados a una opción política. Entonces, la militancia es un factor objetivo que cobra relevancia al momento en que se valora la contratación de funcionarios/as, a fin de elegir de entre las y los aspirantes a quienes, en condiciones de igualdad, garanticen la mayor proximidad a la neutralidad, imparcialidad y al resto de los principios que rigen las elecciones.

73 Asimismo, se desincentiva que los institutos políticos generen estrategias para que sus actuales afiliados/as se incorporen en las filas de la autoridad electoral con propósitos malintencionados.

74 Atento a lo anterior, se considera que la garantía de los principios rectores, destacadamente, imparcialidad e independencia, así como la autenticidad de los resultados de las elecciones constituye un fin legítimo para establecer condiciones el ejercicio del derecho de integrar las autoridades electorales.

75 Asimismo, se considera que la medida es apta para alcanzar el fin apuntado, toda vez que la ausencia de una vinculación vigente y real o tangible de los funcionarios electorales con los partidos políticos permite razonablemente suponer, a primera vista, que la o el ciudadano interesado no responde a los intereses de la organización política en la cual milita y tiene una participación activa dado que en ese periodo se presume no hay una relación directa que pudiera poner en duda la imparcialidad o independencia que el ejercicio del cargo implica.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL (IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA)

Como ha quedado evidenciado, a lo largo del presente acuerdo, las disposiciones constitucionales y legales, así como los criterios emitidos por la máxima jurisdicción en esta materia, realizan un especial énfasis en la importancia que revisten las funciones de los Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, su intervención dentro de todas las etapas del proceso electoral y, consecuentemente, en la necesidad de que en su desempeño, se observen y garanticen todos y cada uno de los principios que rigen la función electoral.

Con este propósito, enseguida se enunciarán las definiciones que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre cada uno de los principios que rigen



la función electoral, los cuales se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 144/2005 de rubro “*FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO*”,⁸ cuyo texto es del tenor siguiente:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

2. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Como se indicó al inicio del presente acuerdo, en el marco del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las figuras de Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes Electorales, para el proceso electoral local 2024-2025, la persona aspirante a dicho cargo, fue encontrada como militante del Partido Revolucionario Institucional, lo anterior, como parte de la verificación de no militancia partidista (mínimo un año) que deben cumplir quienes pretendan acceder a estos encargos electorales, en términos de lo dispuesto en el artículo 303, párrafo 3, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la sentencia recaída en el recurso de apelación SUP-RAP-373/2018 Y

⁸ Consultable en la siguiente liga electrónica <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707>



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

ACUMULADOS, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como consecuencia de ello, dio inicio al procedimiento ordinario sancionador oficioso citado al rubro, con el propósito de verificar si en efecto, como lo afirmó **Nabile Amairani Galván Tapia**, no existió el consentimiento previo para que fuese inscrita al padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional y en consecuencia, la utilización indebida de sus datos personales para tal fin; lo cual, a la postre, también le impediría acceder a ocupar los cargos electorales de persona supervisora electoral y/o capacitadora asistente electoral en el proceso electoral local en curso, al no cumplir con los requisitos legales a que se refiere el párrafo 3, del artículo 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así las cosas, como parte de las investigaciones realizadas para conocer la veracidad de los hechos derivados de la presunta indebida afiliación realizada por la persona aspirante, se ordenó, entre otras diligencias, requerir al partido político señalado como responsable para que informara si la persona de referencia fue en algún momento militante del citado instituto político y, en su caso, remitiera los originales de la cédula de afiliación respectiva, o bien, aquellas constancias de las cuales se pudiese desprender la voluntad de la misma de verdaderamente querer estar afiliado a esa fuerza política.

Es el caso, que como se indicó en el apartado de medios de prueba de esta determinación, el Partido Revolucionario Institucional indicó que **Nabile Amairani Galván Tapia** sí era su militante, mencionando la fecha de afiliación, siendo que, el veinticinco de marzo de dos mil veinticinco (estando dentro del plazo legal para dar respuesta al emplazamiento de ley) exhibió al efecto el documento en el que soporta su dicho, en este caso, el formato de afiliación respectivo, de la que se advierte presuntamente la firma correspondiente a la persona en cuestión.

A partir de lo anterior, de un análisis preliminar, bajo la apariencia del buen derecho, y sin prejuzgar sobre la autenticidad de los elementos de prueba aportados por el partido para sustentar sus afirmaciones, existe en autos al menos constancias que podrían hacer suponer que la afiliación detectada por la Junta Distrital correspondiente, en el marco del proceso de reclutamiento y selección de personas aspirantes a ocupar los cargos de supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, pudiese ser auténticas y, por lo tanto, legal.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, como se refirió en el apartado de marco normativo del presente acuerdo, esta autoridad electoral nacional, en el marco de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, está obligada a observar y garantizar que se observen los principios que rigen la función en esta



materia, como lo son los de *legalidad, **imparcialidad**, objetividad, certeza e independencia.*

Sobre el particular, como ya se dijo, cobran relevancia los principios de imparcialidad, que *consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista;* y el de independencia, concebido por la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro País, el cual implica *una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.*

A partir de las anteriores definiciones, en concatenación con las reflexiones vertidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el mencionado recurso de apelación SUP-RAP-373/2018 Y ACUMULADOS, a propósito de la importancia de las actividades y funciones que normativamente tiene encomendados las y los supervisores electorales y las y los capacitadores asistentes electorales en las distintas etapas de los procesos electorales constitucionales organizados por este Instituto, llevan a concluir en la necesidad de evitar que personas con una afiliación a cualquier partido o fuerza política, puedan o deban intervenir en la organización, preparación y conclusión de todas y cada una de las etapas del proceso electoral en curso.

En efecto, como se analizó párrafos arriba, al tenor con el citado artículo 303 de la Ley de la materia, las personas aspirantes que a la postre serán seleccionadas para ocupar los cargos de supervisores/as electorales y/o capacitadores/as asistentes electorales, realizarán las funciones siguientes: *a. Visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas; b. Identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casillas; c. Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección; d. verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla; e, información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral; f, traslado de los paquetes electorales apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla; g, realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales y; finalmente, todos aquellos que expresamente les confiera el consejo distrital, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la Ley General en estudio, relacionado con la recolección de la documentación de las casillas.*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

Como se desprende de las anteriores atribuciones, las y los aspirantes a estos cargos electorales, para su participación en el proceso electoral en curso, realizarán funciones por demás importantes, sobre todo para la capacitación e integración de las mesas directivas de casilla, las cuales serán ni más ni menos, que los entes que recibirán directamente de la ciudadanía, la votación recibida en los próximos comicios.

Además, como lo refirió la propia Sala Superior en la sentencia mencionada con antelación:

...las tareas que realizan las personas que fungen como supervisoras y capacitadoras-asistentes electorales **inciden directamente en el desarrollo de los procesos electorales, en todas sus etapas: en la fase de preparación de la elección, el día de la jornada electoral y en los cómputos de los votos.**

Así, toda vez que **por el desempeño de sus labores son susceptibles de afectar el resultado de los comicios, es de especial relevancia imponer mecanismos que garanticen que la ciudadanía que participa en dichos cargos observe los principios que deben regir a los procesos electorales**, destacadamente los de **imparcialidad e independencia**.

...

Así, es claro que los supervisores/as y capacitadores/as deben satisfacer, en la medida posible, los estándares de independencia e imparcialidad, en tanto que sus funciones son presupuestos para el debido desarrollo de la elección, lo que involucra además el derecho de votar de la ciudadanía, y la autenticidad de los resultados.

De esta manera, deben evitarse al máximo posible cualesquiera factores o circunstancias susceptibles de incidir en el cumplimiento o valoración de su función, como lo pudiese ser el vínculo partidista con alguno de los participantes en la contienda electoral.

Objetivamente, lo ordinario es que la militancia partidista implica la adhesión a ciertos ideales, convicciones y principios que están estrechamente ligados a una opción política. Entonces, la militancia es un factor objetivo que cobra relevancia al momento en que se valora la contratación de funcionarios/as, a fin de elegir de entre las y los aspirantes a quienes, en condiciones de igualdad, garanticen la mayor proximidad a la neutralidad, imparcialidad y al resto de los principios que rigen las elecciones.

...

Con base en las anteriores consideraciones y en estricto cumplimiento y observancia a los principios que rigen la función electoral, especialmente los de imparcialidad e independencia señalados parágrafos arriba, y tomando en consideración que a la fecha se está desarrollando *el PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES QUE FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2024-2025*, se hace necesario que esta autoridad ponga particular cuidado en vigilar que en la selección de las y los funcionarios electorales a quienes se les contratará y, por consiguiente, se les encomendará el desarrollo de las actividades relacionadas con las próximas elecciones locales 2024-2025, gocen de plena imparcialidad e independencia en el ejercicio del encargo, lo cual, no se podría cumplir, si se permite que personas afines a fuerzas



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

políticas e interés particulares, ideológicos, económicos o de cualquier otra índole, lleven la conducción de las labores que les son legamente conferidas.

En este sentido, y en relación con el caso que nos ocupa, como ya se ha mencionado, a partir de las indagatorias realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se cuenta con indicios que permiten considerar, que bajo la apariencia del buen derecho, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se podría estar frente a una afiliación que no fue producto de la comisión de alguna falta por parte del partido político señalado como responsable, sino a una inscripción como militante previamente consentida, a partir de la información proporcionada y que obra en autos.

Con base en ello, tomando en consideración que la instrucción total y definitiva del presente asunto, podría demorar en un tiempo superior a la o las fechas en que deban llevarse a cabo la contratación de quienes fungirán con los cargos de supervisores/as y capacitadores/as electorales; derivado del desahogo y agotamiento de todas las etapas normativamente establecidas para los procedimientos ordinarios sancionadores, es necesario **DECRETAR PROCEDENTE EL DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES**, para los siguientes efectos:

- **Impedir** a la persona que aspiró al cargo de supervisora electoral y/o capacitadora-asistente electoral, **que continúe ocupando el cargo para el que fue contratada**, hasta en tanto se resuelva en definitiva el procedimiento ordinario instruido.

Lo anterior, porque, de permitirlo, y resultar inexistente la infracción a cargo del instituto político, se violarían en perjuicio de la función electoral, los principios de imparcialidad e independencia, al haberse permitido que una persona con afiliación partidista intervenga directamente en la organización y conducción del proceso electoral; lo anterior, en los términos argumentados en este apartado.

Para los efectos antes precisados, hágase del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a la Junta Local y 03 Distrital de este Instituto en Durango, la presente determinación, para los efectos que en el ámbito de sus atribuciones correspondan, tendentes a cumplir con lo ordenado en la presente determinación.

Los razonamientos expuestos **no prejuzgan** sobre la existencia de las infracciones denunciadas, lo que en todo caso será materia de la resolución que se ocupe del fondo de la cuestión planteada.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 109, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puede ser impugnado el presente Acuerdo mediante recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 459, párrafo 1, inciso b), y 471, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, párrafo 1, fracción XVII, 38, 40, párrafo 3, y 43, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Es procedente la adopción de medidas cautelares en contra de **Nabile Amairani Galván Tapia**, quien aspiró al cargo de supervisora electoral y/o capacitadora asistente electoral en los términos y por las razones establecidas en el considerando **CUARTO**, de la presente resolución.

SEGUNDO. Se impide a **Nabile Amairani Galván Tapia**, continuar ocupando el cargo para el que fue contratada, hasta en tanto se resuelva en definitiva el procedimiento ordinario instruido.

Lo anterior, porque, de permitirlo, y resultar inexistente la infracción a cargo del instituto político, se violarían en perjuicio de la función electoral, los principios de imparcialidad e independencia, al haberse permitido que una persona con afiliación partidista intervenga directamente en la organización y conducción del proceso electoral.

TERCERO. Hágase del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a la Junta Local y 03 Distrital de este Instituto en Durango, la presente determinación, para los efectos que en el ámbito de sus atribuciones correspondan, tendentes a cumplir con lo ordenado en la presente determinación.

CUARTO. Se instruye al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-14/2025
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/EJS/JD03/DGO/273/2024

inmediato realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación.

QUINTO. Se ordena al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral provea lo necesario para el inicio de un cuaderno de antecedentes, a fin de que, por cuerda separa al procedimiento que nos ocupa, se realicen las investigaciones respectivas a fin de conocer las razones que llevaron, en apariencia, a una contratación irregular como Capacitadoras Asistentes Electorales de Sara Ruiz Cerda y Esperanza de Fátima Santillán Herrera, en el marco del proceso extraordinario de renovación de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG2158/2024.

SEXTO. En términos del considerando **QUINTO**, la presente resolución es impugnabile mediante el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador, atento a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en la Octava Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, por unanimidad de votos de la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, del Consejero Electoral Maestro Arturo Castillo Loza, y de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Maestra Rita Bell López Vences

**CONSEJERA ELECTORAL Y PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

MAESTRA RITA BELL LÓPEZ VENCES

Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral